

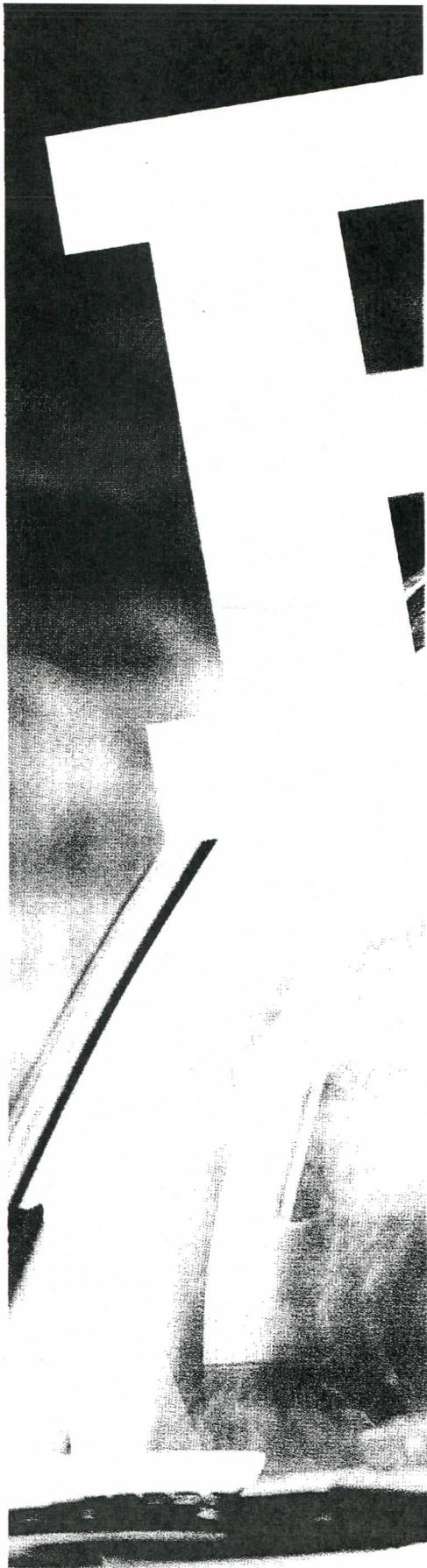


El factor Riggs

Las cuentas bancarias a nombre del general Pinochet, descubiertas en Estados Unidos, han implicado una caída en la apreciación de su figura en el electorado de derecha, lo que podría afectar la cohesión de éste.

Por **Carlos Hunneus**





El hallazgo de las cuentas secretas del general Pinochet y su esposa en el banco Riggs de Washington DC, a raíz de una investigación del Senado de los EE.UU. sobre la lucha contra el terrorismo, abrió un nuevo frente judicial al que fuera poderoso jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército por un cuarto de siglo. A las querellas por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos -que han incluido casos emblemáticos, como "la caravana de la muerte" de octubre de 1973 y el asesinato del comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, un año más tarde, que han llevado a su desafuero-, se suman ahora querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII) por no haber tributado esos ingresos. A la imagen de un dictador todopoderoso e implacable, pero que había sido honrado en el desempeño de sus cargos, se presenta ahora una persona que se enriqueció con el poder. ¿Cuánto afectará este hecho su imagen ante los chilenos?

Sus partidarios han pintado un cuadro idealizado de éste como el "salvador" de Chile que se ha mantenido a lo largo del tiempo, soportando la información en su contra constituida por los crímenes contra personas. Cuando fue detenido en Londres en octubre de 1998, permaneciendo casi un año y medio en la capital británica, sus partidarios lo siguieron defendiendo, sin prestar atención a los hechos que daban origen a su detención, sino a formalidades: las autoridades españolas y británicas "atropellaron la soberanía nacional". Ahora no se usa ese argumento porque el peso de la memoria histórica es más fuerte que entonces. Es un hecho terrible que los dólares hayan tenido más poder de convencimiento en ese sector de chilenos que las muertes y las torturas.

La información de las cuentas de Pinochet ha tenido consecuencias en la opinión pública, provocando una división de posiciones entre los votantes de los partidos de derecha. Los electores de la UDI cierran filas detrás del acorralado y cada vez más solitario ex gobernante y los de RN toman posiciones más críticas sobre el desaforado general. Los resultados de la encuesta del CERC de Septiembre de este año son claros al respecto. La mitad de los votantes del "gremialismo" comparte la tesis de los abogados de Pinochet de que los dineros de las millonarias cuentas provienen de ahorros y buenas inversiones, pero sólo un 25% entre los de RN comparte esta interpretación. Una minoría de los partidarios de la UDI cree que las platas de Pinochet provienen del Estado, 29%, mientras que la mayoría de los adherentes de RN cree que son fiscales, 53%. Mientras sólo un 18% de los votantes de la UDI cree que Pinochet pasará a la historia como un corrupto, es el 39% entre los votantes de RN, habiendo un 54% a nivel nacional, que comparte esta opinión. Mientras sólo un 36% de los votantes de la UDI cree que Pinochet pasará a la historia como un dictador, esa interpretación es ampliamente mayoritaria entre los electores de RN, 70%, similar a la media nacional. La inmensa mayoría de los partidarios de la UDI cree que Pinochet pasará a la historia como uno de los "mejores gobernantes del siglo XX", 68%, pero es una minoría entre los adherentes de RN, 38%. En las encuestas de los años anteriores, las diferencias entre los votantes de ambos partidos eran, en general, menores, pero ahora ellas son muy marcadas.

Este fuerte impacto en su electorado es uno de los factores que explican la prudencia de las directivas de ambos partidos



frente a este caso. Decisiones muy claras en contra de Pinochet tendrían como consecuencia un fortalecimiento de las posiciones de RN en desmedro de las de la UDI, algo que podría amenazar la cohesión del electorado derechista detrás del apoyo a Joaquín Lavín.

El caso Riggs tiene múltiples repercusiones, entre las cuales se encuentra la necesidad de examinar las relaciones entre

el poder político y el poder económico durante la dictadura. El régimen autoritario, de largos 17 años, se explica porque fue una compleja organización política, en la cual Pinochet fue la principal autoridad, compartida con la Junta de Gobierno y numerosos colaboradores, militares y civiles. Estos últimos controlaron desde un comienzo el sector económico y, desde abril de 1978, el Ministerio del Interior.

Fue un Estado dual, con una cara coer-

citiva, preocupada de impulsar una "guerra" contra el marxismo, en Chile y en el extranjero, y una cara simpática, constituida por las reformas institucionales que echaron las bases de una transformación económica que ha tenido efectos positivos en el crecimiento del país. Ambas caras estaban estrechamente unidas entre sí. La autoridad económica sabía el monto de los recursos destinados a los ministerios y la Presidencia y todos sabían que se vivía en un estado de guerra, con poderes de excepción. Algunos colaboradores civiles dieron fundamento doctrinario o ideológico a "la guerra" contra el marxismo, con escritos difundidos en los medios de comunicación, en cursos en la Anepe y a través de minutas preparadas para la Junta de Gobierno y Pinochet. Se olvidan los ataques que esos civiles hicieron en contra de los políticos de la oposición y contra sacerdotes y obispos que defendieron los derechos humanos.

¿Fue Pinochet el único que se aprovechó económicamente de su cargo? Esa es la pregunta que también plantea el caso Riggs. Hay otras preguntas que surgen de él, por ejemplo, ¿por qué el SII no investigó el origen de los fondos que le permitieron a Pinochet adquirir numerosas propiedades en los años 90, como lo hace respecto de cualquier hijo de vecino?

Una mirada al proceso de privatización en los años '80 de las empresas públicas creadas con gran esfuerzo por el Estado chileno desde la década del '40 en sectores estratégicos de la economía, como la siderurgia, electricidad y petroquímica, muestra una situación comparable a la de Pinochet. Allí hubo un aprovechamiento en beneficio personal de algunos de sus más altos ejecutivos, que entraron modestamente al "servicio público" sin otro recurso que su título profesional y usaron las condiciones institucionales de alta concentración decisoria en el Ministerio de Hacienda y la Corfo y la falta de transparencia para fijar las condiciones de venta de las empresas que dirigían para comprar paquetes de acciones que les permitieron su control. Con el apoyo de diestros abogados, inventaron diversas fórmulas jurídicas para revestir esas acciones expropiatorias de formalidad legal y sólo en un caso hay pendiente una disputa judicial por decisiones efectuadas en democracia y no en dictadura.



El caso Riggs ha tenido un fuerte impacto en el electorado de la UDI y RN y explica la prudencia de ambos partidos. “Decisiones claras en contra de Pinochet fortalecerían las posiciones de RN en desmedro de las de la UDI”.

Sólo en la Rusia poscomunista se encuentra un caso similar de confusión de intereses públicos y privados. Esa riqueza, conseguida a partir de hechos inmorales y políticamente condenables, aunque pudieron ser revestidos de “legalidad”, acrecentada durante los años de la democracia, abarca una cantidad considerablemente superior a la docena de millones de dólares que se atribuye a Pinochet y su esposa.

El peso de la memoria histórica mantiene su fuerza. Se equivocaron los analistas, cuando el año 2003 restaron importancia a los eventos con motivo de los 30 años del golpe, atribuyéndolos a un interés económico de los medios de comunicación. El país mostró que tiene heridas pendientes y quiere sanarlas con la verdad y espera que los dirigentes políticos tengan posiciones claras, aunque sean políticamente costosas.

Un primer examen de los datos de las encuestas muestra que la información sobre

las cuentas del banco Riggs de Pinochet no ha producido un daño en su imagen ante la ciudadanía. Esto es comprensible porque predomina el cuadro de un dictador duro, que cometió crímenes que han sido justificados por sus partidarios por haber existido “una guerra” y que ahora incluso lo hacen al afirmar que “todos” somos responsables de ellos. Los abusos económicos son de menor envergadura frente a los hechos que el país conoce, desde aquellos que terminaron en las muertes que documentó la Comisión Rettig, constituida por el presidente Aylwin inmediatamente después de haber entrado a La Moneda en 1990, y las torturas y detenciones conocidas con el informe de la Comisión que presidió monseñor Valech, que fuera vicario de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, organización creada por el gran cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez.

Pinochet y su esposa no tuvieron la medida del general Franco y su esposa. El

“generalísimo de los ejércitos y caudillo de España” concentró una cantidad de poder político superior al que tuvo Pinochet, pero no buscó la independencia económica que se propuso éste. Franco fue un dictador implacable hasta el final de su vida, pero 30 años después de su muerte sus descendientes y partidarios no se han visto enfrentados a un “caso Riggs”.

La decisión del Senado de los EE.UU. ha mostrado una de las perversiones de la concentración del poder en una persona. Sin embargo, el régimen autoritario es más que una persona. Existió y tuvo una larga vida, sin colapsar, por las decisiones de instituciones y personas. La verdad avanza a pasos lentos, pero avanza. Bienvenida, para seguir apoyando su avance en sus diversas manifestaciones.

Carlos Huneeus es PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg y director ejecutivo de la Corporación CERC.